

Los militares en Bolivia

Walter Guevara-A.

Walter Guevara A.: Ex presidente de Bolivia. Ha sido diputado y senador, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior, embajador ante Naciones Unidas y presidente del Congreso Nacional.

Quiebra del sistema que puso a los militares en el Gobierno de Bolivia

Para explicar los acontecimientos carnavalescos y confusos que son señalados por la prensa internacional cada vez que hay un nuevo golpe militar en Bolivia, hace falta examinar un poco más a fondo los elementos que están en juego.

Origen del sistema

Como en la mayoría de los países de América Latina los militares han ejercido el poder en Bolivia, de manera intermitente, desde las épocas de la independencia. Pero aquí sólo se trata de su presencia en el escenario político a partir de la guerra del Chaco (1932-1936) y particularmente desde la década de 1960 hasta el presente.

Lo primero que hay que señalar para este último período es que desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, hay en América Latina una estructura y un acontecer militar y político que fueron originalmente destinados a proteger la seguridad y defensa del hemisferio occidental, pero cuyo desarrollo posterior ha producido consecuencias de carácter interno en la economía y la política de varios países del continente.

El marco jurídico y diplomático de esa estructura es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y algunos de sus componentes son la Junta Interamericana de Defensa (JID) y el Colegio Interamericano de Defensa (CID) que funcionan en Washington, además de los comandantes y otros oficiales de los Estados Unidos y América Latina en distintas capitales. Su coordinación y propósitos son más o menos afines, lo que ha dado lugar a la difusión en Latinoamérica de conceptos tales como "la expansión del comunismo y la contención del comunismo", "la seguridad y defensa ampliada" como doctrina militar y "la construcción nacional" como formulación conceptual en el campo de la política.

Se volverá sobre esos temas en algún capítulo posterior, pero para lo que interesa aquí basta señalar que a partir de la década de 1960 el Brasil, la Argentina y Chile

pueden tenerse como ejemplos importantes del mencionado acontecer político-militar. Sin embargo, es necesario agregar de inmediato que en esos países han ocurrido, en el curso de los últimos años, evoluciones que parecen encaminadas a modificar sus características originales.

En principio, los militares de esos países se propusieron cambiar la institucionalidad democrática por otra que no es de su invención, pero que juzgaron como más apropiada a sus respectivas realidades nacionales. Ese cambio dio lugar a la cancelación de la democracia, de los partidos políticos, de los sindicatos de trabajadores, del Congreso Nacional y al control estatal directo de los medios de comunicación social. Todas esas instituciones propias de la democracia representativa fueron sustituidas por una "Junta de Comandantes", que era la reunión de un grupo de oficiales de alta graduación con mando en las grandes unidades de las respectivas fuerzas armadas. Cada una de esas juntas de comandantes asumió en su país la totalidad de los poderes públicos y reemplazó a las instituciones tradicionales de la democracia. Un mecanismo de represión más o menos severo acompañó a esas medidas. Para justificar esos cambios se proclamó que las fuerzas armadas actuaban en servicio de los altos intereses de su país y en representación de la soberanía popular y también para defender la civilización occidental y el cristianismo.

En ejercicio de esa plenitud de poderes, las respectivas juntas de comandantes nombraron al presidente de la República, o sea, constituyeron el poder ejecutivo. Atribuyéndose las funciones del Congreso, dictaron "actas institucionales" y "decretos leyes" para regular la vida jurídica. En algunos casos, como el de Bolivia, también organizaron el poder judicial, nombrando por decreto a los ministros de la corte suprema de justicia.

Como quiera que el sistema es de aplicación relativamente reciente, ha sufrido variaciones en algunos países. En Chile la junta de comandantes que nombró presidente de la República al general Pinochet, buscó legitimizar sus decisiones mediante un plebiscito popular que, según los resultados oficiales, confirmó esas decisiones. En el Uruguay el mismo procedimiento dio lugar a un rechazo del sistema por gran mayoría del voto popular. En el Brasil se dejó funcionar al parlamento, pero las decisiones legislativas que no se acomodaron a los propósitos de los militares fueron anuladas. En la Argentina se canceló el Congreso, pero aquí, como en el Brasil y a diferencia de Chile, se estableció la alternabilidad de los generales en la presidencia de la República.

Cuándo y cómo se trató de implantar el sistema en Bolivia

En Bolivia los militares que estaban ejerciendo el poder, con intermitencias, a partir de la guerra del Chaco, trataron de institucionalizar su presencia en el escenario político imitando los sistemas del Brasil, la Argentina y Chile a partir de la presidencia del general Barrientos (golpe militar de 1964) y sobre todo desde el gobierno de Banzer (golpe militar de 1961) pero no han podido cumplir su propósito no obstante el decidido y directo apoyo que recibieron del gobierno de los Estados Unidos.

El último intento fue hecho por García Meza en el mes de mayo de este año, cuando propuso que la junta de comandantes se reuniera el 17 de julio para nombrar en su reemplazo un nuevo presidente, que sería posesionado el 6 de agosto. Al hacer esta proposición, García Meza estaba reconociendo que su presencia personal en el poder había llegado a su fin, pero que aún era posible salvar el sistema.

El plan fracasó porque García Meza se echó atrás, sea por su propia voluntad o por influencia de los narcotraficantes, y decidió continuar en la presidencia, alterando de ese modo un procedimiento que, en caso de cumplirse, habría dado lugar a un nuevo gobierno militar sin rebelión y sin romper el sistema. Hubiera sido una especie de legitimidad espúrea, pero legitimidad al fin. El gobierno militar se habría prolongado como en el Brasil, la Argentina y Chile sin traumas y en caso de ser reconocido por los Estados Unidos, podría haberse estabilizado por algún tiempo. De acuerdo a la estadística de los golpes militares en Bolivia, podía dársele de seis meses a un año de vida.

Ese intento fracasó. Se produjo la rebelión que reemplazó a García Meza por la junta de comandantes. En el hecho no parece haber sido ese el plan, pero de nuevo las oscuras influencias que ahora juegan dentro de las fuerzas armadas determinaron ese resultado. La Junta no puede cambiar en nada la realidad política y militar del país, porque no tiene poder suficiente para ello.

En consecuencia, lo único importante de estos últimos hechos es que la imitación del sistema implantado en otros países ha fracasado en Bolivia. Es evidente que no puede consolidarse una institución militar estable en el país.

La cocaína acelera la fractura del sistema

La cocaína se ha convertido en un componente importante del poder político en Bolivia

Al parecer ni siquiera en los Estados Unidos se percibe la verdadera significación de este problema para el país. Desde luego, la fabricación y comercialización de esta droga ha introducido un nuevo y significativo elemento para aumentar la solidaridad interna y determinar las decisiones de las fuerzas armadas. Se trata de un factor delictivo y no político o militar que, no obstante, contribuye a precipitar la fractura del sistema de dominación castrense del país.

Para percibir la magnitud del problema, es útil citar aquí las informaciones que ha publicado la revista **Time** de los Estados Unidos en su edición del 6 de julio de 1981.

Se trata de un negocio que en escala internacional mueve unos 30 mil millones de dólares al año. Una onza de cocaína pura cuesta 2.200 dólares en el mercado americano, lo que significa que vale cinco veces más que el oro. Los consumidores no son vagabundos antisociales que habitan en las barriadas pobres, sino sólidos ciudadanos de la clase media para arriba entre los cuales el consumo de cocaína se ha convertido en un símbolo de riqueza y posición social. Usan cocaína en sus reuniones sociales y de negocio - y no sólo en sus fiestas - los abogados, los empresarios, los burócratas del gobierno, los políticos, los banqueros, los policías, los estudiantes, las secretarías y las camareras de restaurantes y hoteles.

Según esa revista, para el público norteamericano la cocaína no sólo es seductora, sino también carece de los riesgos de los otros narcóticos porque no es un narcótico, no obstante su clasificación oficial equivocada. No deja el malestar habitual que sigue a las borracheras. No produce adicción física, ni cáncer de los pulmones, ni destrucción de las células del cerebro, ni pinchazos en los brazos y en las piernas.

En resumen, así sea equivocadamente, la cocaína está de moda en los Estados Unidos, donde además del consumo individual se utiliza para pagar deudas, comprar automóviles o bienes inmuebles y, sobre todo, para poner de relieve la importancia personal.

No es de extrañar, en consecuencia, que Bolivia que es uno de los pocos países donde se cultiva la hoja de coca en condiciones óptimas, se haya convertido en un proveedor importante del mercado más grande del mundo. Esa actividad trae al país un ingreso que dobla el valor de las exportaciones de estaño, que es el principal producto legítimo que se vende en dólares.

El negocio se remonta a diez o doce años atrás, época a partir de la cual buscó y obtuvo la protección directa o indirecta de los gobiernos militares. Los primeros grandes traficantes se establecieron bajo el gobierno del general Banzer y a partir de entonces el negocio se ha incrementado en proporciones gigantescas. Los militares han ido comprometiéndose cada vez más, deliberadamente o no, proporcionando a los narcotraficantes impunidad, protección e incluso la utilización de ciertas facilidades oficiales, como los sistemas de comunicación de las propias fuerzas armadas.

El coronel Luis Arce Gómez es el representante más conspicuo de esa participación en el narcotráfico. Sería absurdo decir que todos los oficiales están comprometidos, pero no puede menos que observarse que ellos - como todo el pueblo de Bolivia - estuvieron siempre al cabo de lo que ocurría, no obstante lo cual prefirieron seguir apoyando el régimen porque, de una u otra manera, los beneficios alcanzaban para todos.

Tanto fuera como dentro de Bolivia se dijo que el golpe de García Meza del 17 de julio de 1980, así como el de Natusch Busch del 1 de Noviembre de 1979, fueron financiados por los narcotraficantes. Las características de esa actividad hacen difícil presentar pruebas contundentes. Pero lo que no necesita pruebas es que ambos golpes, además de interrumpir el proceso democrático, favorecieron a los narcotraficantes. El nombramiento del coronel Arce Gómez como ministro del Interior, a cuyo cargo se encuentra la represión del tráfico de drogas, vino a resultar una garantía para su impunidad.

Una conclusión fluye de todo lo anterior. Los gobiernos de Natusch Busch y García Meza nacieron envenenados por la cocaína. La Junta que se ha hecho cargo ahora del gobierno no está libre de ese envenenamiento. El proceso de descomposición del sistema está acelerándose.

Problemas derivados de la cocaína

El inescapable compromiso de la junta militar con el narcotráfico crea para el país un difícil problema diplomático, que afecta a su soberanía. En efecto, se dice en Washington que la condición que el Departamento de Estado puso al nuevo gobierno de García Meza para su reconocimiento fue la entrega en Miami, sin trámites de extradición ni cosas por el estilo, de los cinco principales productores de cocaína, que son ciudadanos bolivianos. Esa misma versión ha sido difundida por el periodista brasileiro Newton Carlos, de la Agencia Inter Press Service.

Si esta condición es efectiva y si la cumple la Junta para lograr su reconocimiento, se habrá dado el caso de que ciudadanos bolivianos comprometidos en una actividad ilegal en territorio boliviano, resulten juzgados y encarcelados por esos hechos en un país extranjero. Eso significa, por supuesto, desconocer la protección que la soberanía otorga a los ciudadanos del país, aun cuando sean delincuentes.

Como quiera que en ocasión anterior otro gobierno militar entregó a los Estados Unidos en calidad de prisioneros de guerra a residentes alemanes y japoneses en Bolivia, casados con mujeres bolivianas y con hijos bolivianos, no sería de extrañar que se repitiera la acción.

Esta observación no significa defensa de los narcotraficantes bolivianos. Lo que se propone es demostrar una de las varias consecuencias que pueden resultar para Bolivia del hecho de que los gobiernos militares estén envueltos en este negocio.

Otra consecuencia puede ser todavía más perjudicial para el país. Si bien es cierto que los grandes beneficios de la producción de cocaína se concentran en pocas manos, también es cierto que una parte de ellos alcanza a sectores considerables de la población.

Por ejemplo, los campesinos del Chapare que es donde se cultiva la hoja de coca, ganan con ese producto lo que no pueden ganar con ningún otro. Además, en el área de Santa Cruz, el personal que se utiliza para la transformación de la hoja de coca en pasta, recibe salarios que ninguna otra actividad puede pagar. Finalmente, algunos aspectos de la economía de esa región, como el comercio, los restaurantes, los cines, las diversiones, etc., se benefician también con la circulación de una masa de dinero que de otro modo no existiría.

Así que si alguna vez se suprime esta actividad, los que se han enriquecido con ella seguirán millonarios en dólares, pero los campesinos y otras gentes modestas se encontrarán con que sus medios de vida han desaparecido. En estas circunstancias es de temer que se produzca más de una reacción local peligrosa para la integridad del país.

Un nuevo "súper Estado"

En un esfuerzo de síntesis es posible decir que el pueblo de Bolivia está, otra vez, sometido a las conveniencias de un "super Estado", sólo que ahora no se trata de los "barones del estaño", sino de los "capos" de las distintas "familias" que controlan el narcotráfico. Los militares fueron utilizados en el pasado por el "super Esta-

do - minero feudal" para reprimir y masacrar obreros y campesinos. Ahora se han cambiado los que les dan las órdenes, pero las consecuencias para el pueblo son las mismas o peores que en las épocas de la oligarquía.

La cocaína y los Estados Unidos

Para los Estados Unidos este es un problema que tiene también varios aspectos. El primero se reduce a exigir al gobierno de Bolivia que prohíba o limite el uso de la coca a cambio de contribuir con un poco de dinero para compensar a los campesinos y otras gentes modestas y que persiga seriamente a los traficantes, nombrando funcionarios honestos para ese propósito. Sin duda puede obtener resultados, pero lo que le ocurra a la gente humilde a consecuencia de esas medidas quizás no llegue a las alturas de Washington, circunstancia que si no les interesa a los americanos, interesa a muchos miles de bolivianos. Por eso cuando la pesadilla de las dictaduras militares haya pasado, habrá que pensar en términos de un programa nacional para resolver ese problema.

El otro aspecto se refiere a la frustración en Bolivia, a causa del narcotráfico, de la política de apoyo de los Estados Unidos a las dictaduras militares latinoamericanas.

En efecto, según declaraciones de altos funcionarios americanos, hay que diferenciar en el Tercer Mundo los gobiernos "totalitarios" de aquellos que son "autoritarios". Los primeros son malos. Los segundos son aceptables.

La junta militar de Bolivia parece ajustarse a la definición de gobierno autoritario. Por consiguiente, debería ser reconocido por el Departamento de Estado. Pero el gobierno americano no apoya ni puede apoyar jamás a un régimen comprometido con el narcotráfico.

La solución obvia sería encontrar en las fuerzas armadas bolivianas algún oficial que no esté complicado, directa o indirectamente, en este negocio y que, al mismo tiempo, sea capaz de contener a la izquierda y continuar con el autoritarismo en el gobierno.

Pero ocurre que tal solución no es fácil, porque si se encuentra algún oficial totalmente libre de culpa, lo probable es que por esa misma razón carezca del apoyo de la cúpula militar, apoyo sin el cual no puede sustituir a la junta en el gobierno. Esa realidad se ha demostrado en las dos últimas rebeliones que según uno de sus ac-

tores, han fracasado por el soborno ampliamente distribuido por los narcotraficantes entre los componentes de los altos mandos.

Así que los funcionarios del pentágono y el Departamento de Estado que se ocupan de este asunto deben estar confrontando un dilema bastante fastidioso. Es justo que así sea, porque la junta militar de Bolivia no es más que una derivación degenerada, por virtud de una larga impunidad absoluta, de un sistema de gobierno que fue favorecido por los Estados Unidos desde hace muchos años.

Natuch Busch y García Meza subproductos mediocres del sistema

Unas palabras más para terminar con este tema de la cocaína como uno de los elementos de la quiebra de las dictaduras militares en Bolivia.

Personalmente Natusch y García Meza nunca fueron otra cosa que subproductos mediocres del mismo sistema que engendró a Banzer y otros antes y después de él. Pero lo que le ocurrió a los dos fue que llegaron al gobierno, mediante su correspondiente golpe, cuando el sistema había comenzado a quebrarse. Contribuyó a esa quiebra, por una especie de ironía de la historia, la negativa de los Estados Unidos a reconocer un gobierno "autoritario" pero complicado con el narcotráfico.

Por otra parte, parece haber tenido alguna influencia en la creciente descomposición interna del establecimiento militar la distribución de los beneficios de ese negocio.

La conclusión final es que el régimen se mantiene ahora principalmente por la conveniencia de los narcotraficantes que resultan favorecidos por las divergencias de los dirigentes políticos civiles.

El último siglo de presencia militar en el escenario político de Bolivia

La presencia de los militares en el escenario político de Bolivia es anterior al período de dictaduras castrenses que se inició en América Latina en la década de 1960.

Presencia militar desde la guerra del Chaco

En términos contemporáneos, la presencia de los militares bolivianos en el escenario político viene desde la guerra del Chaco que terminó en 1936.

En los 44 años transcurridos desde entonces debieron sucederse 11 gobiernos constitucionales de 4 años cada uno y el duodécimo estaría en curso. En lugar de eso se han cambiado 31 gobiernos, 18 de ellos por golpe militar.

Cuando se busca fuera y dentro de Bolivia un procedimiento para cambiar los gobiernos militares de facto por la institucionalidad democrática, se piensa siempre en una figura militar ideal capaz de operar esa transformación. Ese es uno de los orígenes de la duración del sistema. Los propios dirigentes políticos y sindicales y los gobernantes extranjeros que alguna vez se preocupan de los problemas bolivianos, coinciden expresa o tácitamente en que las fuerzas armadas son indispensables y, en consecuencia, hay que buscar una solución dentro del sistema establecido por ellas. Tales puntos de vista son el resultado de un conocimiento insuficiente del establecimiento militar de Bolivia.

La presencia de ese establecimiento militar, su utilidad o falta de utilidad para el país y su preponderancia, pueden explicarse por cuatro causas:

- a) La educación que reciben los militares.
- b) El mito de que las fuerzas armadas garantizan la seguridad y defensa externa de Bolivia.
- c) Desfase entre los requisitos de la defensa exterior y la realidad del establecimiento militar boliviano.
- d) El mito de que las fuerzas armadas son el pueblo en armas.

La educación que reciben los militares

Hay que comenzar señalando dos cosas a este respecto. La primera es que la palabra "sagrado" en todas sus acepciones, se usa más por las fuerzas armadas que por la Iglesia. Eso permite al establecimiento militar rodearse de una especie de aura de intocabilidad, algo así como un tabú que no permite el análisis de sus características y encubre deficiencias, errores e incluso delitos, como se ha visto últimamente. Algunos aspectos de la legislación militar consagran esa intangibilidad.

La segunda es que, como una derivación conceptual de lo anterior, los militares califican a su sector de la sociedad boliviana como la "institución tutelar de la patria". Ese absurdo que presupone que el pueblo de Bolivia es comparable a un menor o a

un deficiente mental, se ha repetido tanto que se usa sin rubor, incluso por algunos dirigentes políticos y sindicales civiles.

Como para todos los grupos humanos, la educación determina en gran medida la conducta militar. La educación que reciben los oficiales produce en ellos ciertas deformaciones profesionales que ocurren en otras partes pero que en Bolivia resultan más profundas.

Pero no es eso lo más importante. Lo verdaderamente importante es que esa educación ignora la realidad boliviana o la interpreta mal según se verá más adelante.

Los oficiales son educados dentro del país en el Colegio Militar de La Paz y en otras escuelas superiores de especialización que existen en Cochabamba. Además de esa educación reciben otra en el exterior, en la Escuela Militar de Las Américas, de la Zona del Canal de Panamá, y en diversos institutos de los Estados Unidos.

Los cadetes ingresan al Colegio Militar de La Paz entre los 12 y 16 años, vale decir cuando son más susceptibles a la influencia de la educación. Lo primero que aquí se les enseña es que la "institución tutelar de la patria" es "sagrada". En consecuencia, ellos están llamados a ejercer una especie de sacerdocio en el altar de la patria. Esa circunstancia los hace diferentes y superiores a los demás muchachos de su edad, lo cual queda señalado por virtud de su uniforme.

La solidaridad de ellos es también "sagrada". Un militar jamás debe perjudicar irremediablemente a otro militar, ocurra lo que ocurra. Todos deben mantenerse juntos y defenderse juntos frente al mundo civil al que juzgan adverso al hombre de uniforme.

En lo que se refiere a instrucción, llevan el programa de los colegios secundarios con cierto mayor énfasis en las materias técnicas y en la historia militar general y especial de Bolivia y al egresar como sub-tenientes reciben el título de bachiller. Para entonces, los jóvenes oficiales están espiritualmente divorciados del pueblo al cual temen al mismo tiempo que desprecian.

Esa deformación profesional es una herencia del militarismo europeo, sobre todo del alemán anterior a las dos guerras mundiales, herencia transmitida por las misiones que educaron a los oficiales bolivianos entre principios del siglo y la terminación de la Segunda Guerra Mundial.

Tal falta fue claramente percibida hace mucho tiempo, y cuando se produjo la revolución nacional de abril de 1952, uno de sus propósitos fue cambiar la mentalidad del "viejo ejército masacrador". Pero el procedimiento al que se recurrió fue equivocado. En lugar de modificar la filosofía, el sistema y los programas del Colegio Militar, se creyó que bastaba con facilitar el ingreso al mismo de hijos de obreros y campesinos. Así se hizo, en efecto, en una proporción bastante considerable. Pero como no podía menos que ocurrir, esos adolescentes de origen modesto no cambiaron el sistema y más bien resultaron moldeados dentro de sus características. Imbuidos de su nueva condición de caballeros cadetes, encontrándose socialmente elevados, aperciéndose que habían adquirido un lugar de privilegio en la sociedad sin esfuerzo de su parte, pronto olvidaron el taller, la chacra o la aldea de donde salieron y cuando la ocasión se presentó en su vida de oficiales, no trepidaron en disparar contra su propia gente. Muchos de ellos son ahora los generales que se disputan la presa del poder en Bolivia.

Pero hay algo más grave que esa deformación profesional. Ni en el Colegio Militar ni en las escuelas superiores ni en las de especialización, se enseña a los oficiales los conceptos básicos de la filosofía y la razón de ser y de existir de la profesión. Es posible que ellos hayan oído mencionar a Von Clausewitz, pero parece indudable que no lo han estudiado nunca.

Si lo hubieran leído sabrían que la razón de ser y existir de la profesión militar se encuentra fuera de ella. En efecto, en toda sociedad la profesión militar existe para administrar la violencia física. Pero la violencia física nunca es un fin en sí, salvo en los casos de locura. Nadie pega a otro por el gusto de pegarle, sino por alguna razón buena o mala. Ningún país hace la guerra por el placer de la destrucción y la matanza, sino porque quiere obtener alguna ventaja o algún beneficio tangible o intangible como resultado de la misma.

De ello se deriva que la administración de la violencia física como profesión es siempre un medio, un instrumento para lograr propósitos que se escogen o se definen en otra parte, con otro criterio, por otros funcionarios del Estado cuya autoridad emana, según las circunstancias, de la voluntad divina, de la herencia, de la revolución o del voto popular. Dicho de otro modo, las fuerzas armadas, cuyo oficio es administrar la violencia física, no tienen facultad para señalar en qué circunstancias, por qué y contra quien debe aplicarse ella. Esa atribución corresponde a otros órganos del Estado, que en las democracias representativas son el poder ejecutivo y el congreso, que representan constitucionalmente al pueblo y ejercen el poder por delegación de su soberanía, y en los regímenes totalitarios en partido y su comité

central. Como se ve, se trata de una atribución política y no militar que constituye el fundamento de la autoridad civil sobre el establecimiento castrense, cualquiera que sea la forma de gobierno. Es por eso que Von Clausewitz dijo que "la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios".

Cuando las fuerzas armadas, olvidando su razón de ser y existir se atribuyen las funciones de otros órganos del Estado, destruyen el ordenamiento jurídico de la sociedad y crean las condiciones para su propia destrucción. Eso ocurrió en gran escala y con una trágica seriedad en el Japón y eso está ocurriendo ahora en Bolivia en pequeña escala y en calidad de farsa.

Una cosa más hay que añadir para que esta explicación no resulte del todo desconcertante a los militares bolivianos. Si bien es cierto que la determinación de por qué, contra quién y cuándo debe aplicarse la violencia física está fuera de las fuerzas armadas, en cambio **cómo** aplicarla es su función propia. En efecto, la administración de la violencia física presupone la preparación de las tropas, la selección del material bélico, la enseñanza del uso apropiado de las armas, el movimiento oportuno y eficiente de esos factores y otros innumerables problemas logísticos, además de la elección de los campos de batalla, la preparación y dirección del combate, la explotación de los resultados, etc., etc. Ese es su campo de acción y en él deben tener autonomía.

Ahora bien, todas esas cosas que son elementales como la teología para los sacerdotes, suenan a herejía para los militares bolivianos porque no les han enseñado nunca en sus colegios y escuelas.

Esa deficiencia original no hace más que agravarse en las escuelas superiores o de especialización. En la Escuela de Armas y en la de Comando y Estado Mayor se enseña a los oficiales algunos elementos de las ciencias sociales, de la economía, del derecho, de la diplomacia, de la administración, etc., todo lo cual los lleva a creer que están preparándose para ejercer el gobierno, lo que equivale a decir para formular y decidir la política nacional en todos sus aspectos.

Hechos históricos y realidades nacionales que la educación militar ignora o interpreta mal

No es de extrañar que así formados por la educación recibida en Bolivia y en el exterior, los militares bolivianos estén convencidos de que han sido llamados a ejercer la misión "sagrada" de gobernar al país. A esa formación teórica hay que agregar, por supuesto, las ventajas y beneficios que proporciona el ejercicio del poder y

últimamente las ganancias que provienen, directa o indirectamente, del narcotráfico.

Pero como quiera que esa educación teórica es algunas veces equivocada y otras insuficiente, es útil examinar los vacíos, los errores y las deficiencias de interpretación con respecto a la realidad boliviana que producen las consecuencias que el pueblo sufre constantemente. Ese examen puede ser particularmente útil para los militares ya que les haría comprender las razones por las cuales los Banzer, los Natusch Busch y otros generales que están haciendo cola para apoderarse de la presidencia de la República están equivocados.

Un error político y una humillación innecesaria que han producido consecuencias de largo alcance

En abril de 1952 y por el propio impulso del alzamiento popular, resultaron clausurados de hecho el Colegio Militar de La Paz y las otras escuelas de profesionalización castrense. Las fuerzas armadas desaparecieron temporalmente como elemento preponderante del escenario político. Un poco más adelante se mencionarán las causas profundas de ese acontecer.

Por de pronto, es necesario añadir aquí que un año después de su clausura se reabrieron el Colegio Militar y las demás escuelas y las fuerzas armadas comenzaron a funcionar más o menos como de costumbre.

Pero al mismo tiempo se organizó la Cédula Militar del MNR. La creación de ese organismo partidario dentro de las fuerzas armadas dio lugar a la exigencia, expresa o tácita, de que todos los oficiales que quisieran continuar su carrera se inscribieran como militantes del partido de gobierno. Ese fue un error político y una humillación innecesaria que se originaron en el seno mismo de la oficialidad, lo que no quita que la aceptación de esas medidas fuera una responsabilidad del gobierno. Ese error ha tenido consecuencias de largo alcance.

Las causas y las derivaciones políticas y militares de ese error pueden explicarse de dos maneras distintas. La primera, la falta de claridad teórica de los dirigentes principales del MNR. La segunda, como una medida pragmática de previsión.

Desde el punto de vista teórico, lo que no tuvieron en cuenta los dirigentes del MNR fue la diferencia que existe entre la institucionalidad totalitaria y la institucionalidad de la democracia representativa que la revolución no había cambiado ni se proponía cambiar.

En efecto, cuando por definición institucional "el partido es el Estado" y el gobierno se ejerce por una dictadura de clase de duración indefinida, como ocurre en los regímenes totalitarios, el establecimiento militar no puede ser una excepción al sistema. Lo contrario constituiría una amenaza para la existencia misma del Estado, cuyo instrumento defensivo y ofensivo, en escala internacional, está constituido por las fuerzas armadas.

En las democracias representativas, que son pluralistas por definición, la alternabilidad de los partidos políticos y de las personas en el ejercicio del poder es una condición de su realidad y el Estado existe por separado de ellos. Por consiguiente, sería absurdo que los miembros del establecimiento militar que es permanente, tuvieran que cambiar su filiación política con cada cambio de partido en el gobierno.

No saber o no comprender esa diferencia fue el error teórico que dio lugar a que el MNR organizara la Célula Militar del partido.

Esa insuficiencia en la percepción de los problemas teóricos de la revolución dio también lugar a otro error. El impulso popular de la revolución fue tan grande que el MNR no necesitaba de las fuerzas armadas para sostenerse en el gobierno. Por consiguiente, esa era la oportunidad - la primera oportunidad real en nuestra historia - para establecer la autoridad del poder civil sobre el establecimiento militar. Para ello era necesario poner en práctica un proceso de reeducación desde el mismo Colegio Militar. Cambiar la enseñanza, los programas y la filosofía de la carrera militar en el país sobre las bases que se han mencionado en otro aparte de este documento. No fue eso lo que se hizo, infortunadamente.

Además de esos errores de origen teórico hubo otros de carácter pragmático, más inmediatos y más fáciles de comprender. Ante el temor permanente de los golpes militares se pensó que la afiliación política de los oficiales en el partido de gobierno garantizaría su lealtad. No se percibió en ese tiempo que una afiliación forzada sólo produciría resentimiento, porque si bien a los militares les gusta mucho ser actores de la política, en cambio detestan las etiquetas partidarias ya que se precian de estar por encima de ellas. Son políticos que se niegan a reconocer las reglas del juego. Para ellos, gobernar un país no es hacer política.

Con el golpe del general Barrientos (noviembre de 1964) que era el jefe de la Célula Militar del MNR y vicepresidente de la República por elección popular, se destruyó definitivamente la ilusión de que esa Célula era una garantía de estabilidad del

régimen. La Célula desapareció, pero quedó el resentimiento alimentado precisamente por aquellos jefes y oficiales que fueron sus miembros más activos.

La consecuencia durable de aquel error político ha sido que en las escuelas y en los círculos militares en general, se recuerda la clausura del Colegio Militar y la exigencia de inscribirse en el partido de gobierno para continuar la carrera, como una humillación que no debe repetirse jamás. Esa experiencia se ha convertido en un elemento de cohesión militar contra el pueblo y no sólo contra los partidos. Se ha derivado de ella la conclusión equivocada de que la "institución tutelar de la patria" no debe permitir nunca más que el pueblo se imponga en el gobierno por una insurrección como la de 1952 o por elecciones. Ese error fue reforzado desde el exterior con las enseñanzas recibidas en Panamá y con la instrucción y el armamento especial destinado a la lucha antisubversiva más bien que a la seguridad y defensa del país.

Para que aquella experiencia refleje más fielmente la realidad, es necesario agregar que la clausura inicial del Colegio Militar y de las otras escuelas no fue tanto la consecuencia inmediata de la derrota del ejército cuanto la expresión de un resentimiento acumulado por muchos años en la conciencia popular.

Para mencionar de nuevo la guerra del Chaco, que es un hito en nuestra historia, hay que decir que no se había olvidado en 1952 que los generales derrotados en la guerra pasaron a ocupar de inmediato el palacio de gobierno por la vía tradicional del golpe de Estado. Tampoco se habían olvidado las masacres de obreros en Llagua y Siglo XX; las compras simuladas de armas en el extranjero para otros países utilizando el nombre de Bolivia; la frustración de las aspiraciones populares puestas una y otra vez al servicio de tal o cual presidente militar.

En suma, para entender aquellos acontecimientos, hay que tener en cuenta que la insurrección popular del 9 de abril, además de su finalidad fundamental de arrojar del gobierno a la oligarquía minero-feudal, tuvo también la intención de cambiar el "viejo ejército masacrador" por una nueva organización militar, criterio con el cual estuvo de acuerdo la mayoría de los oficiales jóvenes que había vivido las frustraciones de la guerra junto con los civiles que dirigieron la revolución.

En conclusión, enseñar a los oficiales que aquellos hechos fueron una ofensa gratuita contra las fuerzas armadas es distorsionar la historia y predisponerlos injustificadamente contra el pueblo. Lo apropiado para el país y para las propias fuerzas armadas es buscar y explicar las causas profundas de tales hechos.

Quiénes son los responsables de la inestabilidad política en Bolivia

Si hay algo que desprestigia a Bolivia es su inestabilidad política. Todos preguntan con ironía un poco despectiva si este golpe es el número 196 o el 206. Quieren saber, además, cuál es la causa de semejante inestabilidad.

No hay Sitio aquí para ensayar una respuesta sociológica. Desde la guerra del Chaco hasta 1980, se han producido 30 cambios de gobierno, 18 de ellos por golpes militares. A partir de 1980 hay que agregar 2 golpes militares más, lo que hace un total de 20 golpes militares en 45 años, o sea, un promedio de 1 golpe militar cada 2 años.

No hace falta agregar nada más para observar que la inestabilidad política de Bolivia se manifiesta principalmente mediante la acción de las fuerzas armadas. Esto no se enseña en el Colegio Militar ni en las otras escuelas de profesionalización castrense y, por consiguiente, en vez de corregir esa realidad, los oficiales sólo ambicionan agravarla.

Concentración del poder económico y político e impunidad absoluta

No obstante su frustración general, el proceso iniciado en abril de 1952 quitó el poder económico a los "barones del estaño" y lo trasladó a manos del gobierno. Desapareció así el súper Estado que manejaba el país mediante hilos invisibles. Otras nacionalizaciones, como la de los ferrocarriles, el petróleo, el transporte aéreo y parte de la banca, concentraron en el gobierno una inmensa suma de poder económico que, añadido al poder político tradicional, dio al presidente de la República una autoridad tan grande que si no está balanceada por el libre juego de los partidos políticos, por el Congreso, por las organizaciones de trabajadores y por los medios de comunicación social, resulta muy peligrosa.

El uso discrecional y sin control alguno de ese poder es otra de las causas de la permanencia de los militares en el gobierno. Cada general de turno, a la vez que el presidente de la República, viene a ser el equivalente combinado de Patiño, Aramayo y Hoschschild y del representante inglés de la Bolivian Railway, del representante americano de la Standard Oil y de los antiguos accionistas alemanes de Lloyd Aéreo Boliviano. Ni qué decir que en los niveles correspondientes, los gerentes generales, los gerentes de compras, los gerentes de operaciones, de personal, etc., son casi todos militares en esas empresas.

Semejante concentración de poder económico y político ha dado lugar a una impunidad absoluta en el ejercicio del gobierno por parte de las fuerzas armadas. Esa

impunidad es la que explica que la corrupción de su sistema haya llegado al extremo de envolver a la institución en el tráfico de la cocaína. Es sabido que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que ha ocurrido a las fuerzas armadas de Bolivia.

El comunismo como realidad y fantasía

Es axiomático que para cualquier gobierno es útil contar con un buen enemigo, real o imaginario. El enemigo de las fuerzas armadas de Bolivia es el fantasma comunista.

El comunismo no es una simple invención. Existe en Bolivia como en todos los países del mundo. Sus finalidades son en todas partes iguales: por un lado, combatir el imperialismo americano; por el otro, defender la Unión Soviética y los demás países socialistas, y según las circunstancias, procurar que el régimen político que propugnan sea establecido en el país.

Pero para equiparar la realidad con la fantasía hay que agregar que los comunistas de Bolivia están divididos entre los que siguen la líneas de Moscú y los que siguen la línea de Pekín. Cada una de esas fracciones se subdivide en capillas internas irreconciliables. Así se explica que los comunistas de todas las fracciones hubieran obtenido en las últimas elecciones sólo 3 senadores sobre un total de 27, y alrededor de 10 diputados sobre un total de 117, y ello gracias a que sus candidatos fueron incluidos en las listas de las coaliciones políticas que se formaron sobre la base del MNR y el MNRI. Por sí solos, e incluso actuando en conjunto, los comunistas de todos los matices difícilmente podrían elegir más de 1 senador y 4 ó 5 diputados.

Es cierto que además de los comunistas hay bastante gente superficial que al percibir las condiciones de miseria y dependencia en que se debate el pueblo, pierde la perspectiva y acompaña, mal que bien, a los comunistas. Sin embargo, en el momento de la verdad estos ciudadanos, hombres y mujeres de buena voluntad, suelen ser los primeros que resisten los cambios estructurales más o menos serios y "se retiran de la política".

Como se ve, el fantasma "extremista" que los militares persiguen sin cesar, es bastante más pequeño en la realidad que en la propaganda oficial. Los militares saben esto tan bien como cualquier otro, pero continúan hablando de los extremistas, de las conspiraciones internacionales, de los riesgos para la seguridad y defensa del país, de la defensa de la civilización occidental cristiana y otras cosas por el estilo, porque ellos resultan útiles para justificar su presencia en el gobierno.

Lo imperdonable es que por esta razón de conveniencia partidista se reprima violentamente cualquier demanda que los obreros por mejores salarios y condiciones de trabajo, cualquier protesta estudiantil, cualquier divergencia con lo que se ha enseñado a los estudiantes o con su modo de interpretar esas enseñanzas. En resumen, cualquier oposición a las dictaduras de uniforme.

El pacto militar-campesino

Los campesinos constituyen más de dos tercios de la población de Bolivia. La revolución nacional les dio la propiedad de la tierra que trabajan. Es cierto que faltan muchas cosas que el país debe reconocerles como educación, higiene, enseñanza técnica, maquinarias, semillas, etc. Pero la propiedad de la tierra ha hecho de ellos ciudadanos independientes, lo que se ha completado con su derecho al voto sin la exigencia previa de saber leer y escribir.

Teóricamente, los campesinos - que en general son pobres y viven mal - deberían ser los más susceptibles a la influencia del comunismo, pero no lo son por una razón muy simple. A ellos no les interesa que el Estado sustituya a sus antiguos patronos como propietario de la tierra. Sólo quieren que sea suya. A pesar de su bajo nivel cultural temen que un gobierno comunista socialice también la tierra y eso es anatema para ellos. Sin más palabras, esas realidades explican que las guerrillas jamás hubieran llegado a interesar a los campesinos. Así que el fantasma comunista no puede ser tampoco atrapado entre los habitantes del campo, porque en la perspectiva general de las clases o grupos que componen la sociedad boliviana, ellos se encuentran más inclinados al conservantismo que a cualquier otra corriente política.

Esa realidad fue claramente percibida por el general Barrientos que entre los militares era uno de los que tenía más instinto político y que, además, orientaba su acción claramente de acuerdo a las enseñanzas recibidas en las escuelas del exterior. Por lo demás, su proximidad a los campesinos, entre los cuales se había formado de niño, y su dominio del idioma nativo, facilitó en gran medida la combinación política que el mismo bautizó como el "pacto militar-campesino". Si bien esa era una combinación artificial porque reunía en una organización política a los militares, que teóricamente están prohibidos de actuar en ese campo, con los campesinos que recién están ingresando a ese escenario, resultó en la práctica un arreglo importante mientras vivió el general Barrientos. Cuando este desapareció, la artificialidad de esa combinación se hizo evidente y las fuerzas armadas terminaron masacrando a los campesinos en el valle de Cochabamba.

La enseñanza que fluye de esta experiencia es que las fuerzas armadas están fuera de su sitio cuando están fuera de sus cuarteles. Ni siquiera la venalidad de algunos autotitulados "dirigentes campesinos" que viven y ejercen oficios en las ciudades más bien que en el campo, y que ofrecen al general de turno apoyo de diversos sectores campesinos como si fueran lotes de ganado que se venden por determinado precio ha servido para devolver a los campesinos la confianza que un día depositaron, más o menos unánimemente, en el general Barrientos, ni para hacer desaparecer la desconfianza instintiva que los militares sienten por la gente del pueblo.

El proletariado

El proletariado es la clase social que más ha sufrido las consecuencias de las dictaduras militares. Este es el grupo humano que ha sido masacrado varias veces en las minas y que se ha enfrentado con las manos desnudas a los tanques y las ametralladoras en las ciudades. En consecuencia, es en esta clase social en la que los militares podrían encontrar el enemigo hipotético al que su propaganda se refiere constantemente.

Sin embargo, para ver si ese enemigo existe, conviene examinar si hay en Bolivia una clase obrera capaz de asumir la tarea de una revolución comunista con probabilidades de éxito.

La conciencia de clase y la capacidad revolucionaria del proletariado no son fenómenos espontáneos. Según la más estricta ortodoxia, se originan en las condiciones que la sociedad capitalista, en las últimas etapas de su desarrollo, impone a un grupo social determinado. Esas condiciones son tales que en los proletarios no pueden escapar a su clase sino mediante la revolución. No es suficiente que hayan explotados y explotadores para que la conciencia de clase y la capacidad revolucionaria adquieran personería propia en las luchas políticas. Es también preciso que los proletarios, como miembros de la clase explotada, no puedan cambiar voluntariamente su condición. Es bajo la presión de esas circunstancias que el proletariado se convierte de "clase en sí" en "clase para sí", como se acostumbra decir en la terminología socialista.

Ocurre que en Bolivia aquellas circunstancias no se han hecho presentes o carecen de la fuerza necesaria. El capitalismo boliviano, que es fundamentalmente dependiente, está lejos de alcanzar su pleno desarrollo. El proletario más típico, que es el minero, puede cambiar su condición regresando al campo del que vino o convirtiéndose en artesano de las ciudades. No importa para el caso que la condición de

campesino pobre, comunario o artesano sea históricamente anterior a la de proletario. Lo cierto es que no se cumplen en Bolivia las condiciones que crean la conciencia de clase y la capacidad revolucionaria del proletariado. Tan cierto es esto que después de muchos años de propaganda ortodoxa organizada y eficiente el proletariado boliviano no ha sustituido su conciencia nacional por la conciencia de clase y en las horas de crisis, aquella se sobrepone a esta última. Nada de esto contradice el hecho real de que el proletariado boliviano es el más combativo de América Latina.

La prueba histórica de estas observaciones se dio durante la revolución del 9 de abril de 1952. Cuando el ejército fue derrotado por el pueblo en las calles de La Paz y los alrededores de Oruro, no hubo, por un buen tiempo, otra fuerza coercitiva que las milicias obreras armadas. El gobierno del MNR estaba a su merced, pero las condiciones no estaban dadas para una revolución socialista y el proletariado minero comprendió instintivamente esa verdad y aceptó las premisas de la revolución nacional.

Sin necesidad de estudios académicos, la clase obrera de Bolivia percibe que la revolución socialista y la dictadura del proletariado que es su instrumento de ejecución, requieren de condiciones objetivas de las que Bolivia carece absolutamente. Tales condiciones son las que ofrecen los países grandes como Rusia, China, los Estados Unidos o el Brasil, todos los que poseen una extensión continental, inmensos recursos naturales y fácil acceso al mundo exterior.

El argumento parece más claro si se dice que la revolución socialista de 1917, que dio origen a la Unión Soviética, no habría sido posible en Grecia o Portugal. Las condiciones objetivas de Rusia - su extensión geográfica, sus grandes recursos económicos, su enorme población - fueron elementos vitales para el éxito de aquel acontecimiento histórico.

Bolivia es una nación vulnerable y dependiente como pocas de circunstancias extrañas a su control, incluyendo la mediterraneidad. Importa una gran cantidad de sus alimentos. Toda su economía está pendiente de las fluctuaciones del mercado internacional de minerales. En tales condiciones, apenas si es necesario agregar que incluso los comunistas ortodoxos comprenden que no pueden acomodar su lucha a los dogmas de su partido. Saben que en esto, como en otras tantas cosas, el destino boliviano, al igual que el de otros pueblos pequeños, será determinado por el fracaso o el éxito de la revolución socialista en las grandes potencias.

En consecuencia, parece evidente que ni siquiera entre los proletarios el fantasma comunista es una amenaza para la existencia de Bolivia o para la seguridad y defensa del sistema occidental.

Realidad contra dogmatismo

No sólo los militares ven fantasmas donde no los hay. También le ocurre eso a la izquierda dogmática con respecto a las fuerzas armadas.

Para el punto de vista dogmático, el establecimiento militar de Bolivia no es más que un producto, una función de la dependencia del país y, en último análisis, una manifestación de la lucha de clases que es inescapable en toda sociedad. En consecuencia, para resolver el problema militar hay que ir a la raíz, lo que significa que sólo la revolución socialista puede modificar esa situación.

En un plano estrictamente teórico, no puede negarse que el militarismo nacional desempeña una función importante para mantener la dependencia del país, pero no es esa su única realidad y, en ciertas circunstancias, como las actuales, ni siquiera la más importante.

En efecto, los militares bolivianos han desafiado más de una vez a los Estados Unidos para continuar gobernando por bastante tiempo. En otras palabras, el establecimiento militar del país existe y se sostiene en el poder de acuerdo a su propio interés, incluso cuando difiere o contradice los factores de la dependencia. En buena medida, es un fenómeno nacional autónomo. Un problema que debe ser resuelto internamente.

También debe aceptarse que, en teoría, las fuerzas armadas de Bolivia desempeñan un papel en la lucha de clases y que en tal calidad representan y defienden los intereses de la burguesía nacional aliada con el imperialismo. Sin embargo, observando la realidad objetiva de Bolivia se encuentra que esa información sólo tiene valor relativo.

La burguesía boliviana es tan insignificante que no puede manejar, ordenar o disponer de las fuerzas armadas. Todo lo contrario, vive pendiente de lo que los militares dicen, ordenan o hacen. Un ministro general es para esa burguesía mucho más importante que el presidente de cualquier empresa, incluyendo las corporaciones norteamericanas que, por lo demás, casi no tienen intereses en Bolivia. Como se ve, en este caso como en el anterior, hay bastante distancia entre el dogma y la realidad.

Desajuste de la educación militar con el proceso histórico y la realidad nacional

Para concluir este punto relativo a la educación que reciben los militares bolivianos, sólo cabe repetir que ellos no sólo padecen de una deformación profesional explicable, sino también de un desconocimiento o incomprensión del proceso histórico y las realidades fundamentales del país. Cuando estudian esas cosas su análisis peca de superficialidad y se orienta por sus intereses o por sus prejuicios.

Sin embargo, no sería justo decir que se trata de una deficiencia exclusiva del establecimiento militar boliviano. Ocurre también en otras partes. Un oficial venezolano dijo al respecto algo que se ajusta al caso, por lo que es preferible citar sus palabras literalmente:

"Por qué la sociedad en Latinoamérica no se interesa por la educación de los militares, actitud que ha obligado a las fuerzas armadas a desarrollar un sistema educativo aparte, pero muy aislado de la realidad nacional. Esto ha propiciado la formación de una subcultura militar que quizás no se integra plenamente a la sociedad de los pueblos. Por otra parte, la tecnología militar nos viene de fuera, por lo cual la formación de las fuerzas armadas se mantiene vinculada estrechamente a una cultura extranjera".

El mito de que las fuerzas armadas garantizan la seguridad y defensa exterior de Bolivia

Mucha gente se pregunta cómo y por qué el pueblo de Bolivia, que ha sufrido durante tanto tiempo una dictadura militar tras otra, tolera esta situación.

Una de las explicaciones de esa realidad reside en el mito de que las fuerzas armadas garantizan la seguridad y defensa exterior del país. Como todo mito, este no responde a la realidad, pero influye en la opinión pública y también en el criterio de los dirigentes políticos.

La seguridad y defensa exterior de Bolivia descansa sobre dos cosas: su posición geográfica en Sudamérica, y el procedimiento de consultas del sistema interamericano.

Geopolítica y geoestrategia

La posición de Bolivia al centro del continente sudamericano es una realidad geopolítica y geoestratégica de la mayor importancia para el país y para sus vecinos que son cinco. A ninguno de ellos le conviene que Bolivia sea desmembrada para aumentar el territorio de otro, porque en ese caso quedaría roto el actual equilibrio

continental. Así que es por su propio interés que los vecinos de Bolivia se vigilan celosamente entre sí para evitar que alguno crezca a costa de este país. Por otra parte, es obvio que ha pasado en América la época de las conquistas territoriales por la fuerza de las armas.

Se puede agregar, todavía, que los vecinos de Bolivia no sólo vigilan su integridad territorial, sino que tratan de evitar la influencia preponderante de cualquiera de ellos en los asuntos internos de ese país, porque tal situación contradice sus intereses. Lo anterior es de tal modo cierto, que algún diplomático dijo que si no existiera Bolivia, que hace las veces de un Estado amortiguador en Sudamérica, habría que inventarla.

Como se ve, en esa realidad no influyen de ninguna manera las fuerzas armadas del país. Esa realidad existe por sí misma.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

El otro pilar sobre el que descansa la seguridad y defensa exterior de Bolivia es el procedimiento de consultas del sistema interamericano, que fue establecido para evitar los conflictos armados intracontinentales y que ha dado buenos resultados al respecto.

El Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) tiene como una de sus finalidades prevenir, evitar o suspender los conflictos armados entre países del continente. Para ello aplica lo que se llama el procedimiento de consultas, que consiste en que al presentarse un riesgo de esa clase o estallar una acción armada de un país contra otro, los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio se reúnen inmediatamente y toman las medidas necesarias para detener ese conflicto y arreglarlo mediante procedimientos pacíficos. Para el caso, que no ha ocurrido nunca hasta el presente, de que un país se negara a reconocer o aceptar las sugerencias de la reunión de Consulta, el TIAR establece medidas que van desde el retiro de la representación diplomática de los demás países americanos en aquel que resista las proposiciones que se le han hecho, pasando por la suspensión de las relaciones comerciales, hasta el empleo de la fuerza. El resultado práctico es que excluyendo las miniguerras, no ha vuelto a ocurrir en los últimos cincuenta años una guerra intracontinental desde aquella del Chaco (1932-1936) entre Bolivia y el Paraguay y que duró tres años y costó cien mil vidas.

En el caso del que se trata, si a pesar de las realidades geopolíticas y geoestratégicas que se han mencionado, Bolivia sufriera una agresión, el sistema de consultas

entraría a funcionar inmediatamente para detenerla y buscaría los correspondientes arreglos por la vía pacífica. Cualquier acción que el país tomara en ese caso tendría que ser diplomática y no militar.

Es bien sabido que Hitler dijo que los tratados son papel mojado. Eso depende de quién se interesa en el cumplimiento de los tratados, observación que seguramente hizo demasiado tarde el Führer alemán en el momento que se suicidaba. En este caso concreto, no sólo los países latinoamericanos sino también Estados Unidos están directamente interesados en que se cumpla el TIAR. Sin entrar en más explicaciones hay que decir que a nuestro vecino del norte le interesa que no se produzcan guerras internacionales en Latinoamérica, que es su retaguardia estratégica, por la misma razón que a la Unión Soviética le interesa evitar guerras entre Polonia y Alemania del Este, por ejemplo.

Lo que muestra la historia

Por lo demás, la historia muestra que la seguridad y defensa del país nunca estuvo pendiente de la acción de sus fuerzas armadas. En efecto, si ese hubiera sido el caso de Bolivia, habría desaparecido hace mucho tiempo, ya que sus fuerzas armadas perdieron todas las guerras internacionales en las que participaron antes del establecimiento del sistema de consultas y durante los últimos cien años.

Desfase entre los requisitos de la defensa exterior y la realidad del establecimiento militar de Bolivia

En principio, toda fuerza armada sirve para dos cosas: para disuadir la agresión o para ganar la guerra. Ambas funciones son igualmente importantes.

Disuasión

Para disuadir la agresión hay que mostrar al enemigo potencial, sea éste uno solo o una alianza, que se dispone de los medios y la preparación necesaria para rechazar la agresión.

Cuando el enemigo potencial está convencido de que esa es una realidad, se abstiene de iniciar las actividades bélicas, porque ve que puede perder la guerra o, al menos, no está seguro de ganarla.

En relación a ese principio teórico conviene comparar la realidad del establecimiento militar de Bolivia con aquella de sus vecinos.

El Brasil es una potencia mundial emergente que fabrica y exporta armas, incluyendo aviones y tanques que han sido utilizados en la guerra entre el Irán y el Irak. Tiene un medio millón de hombres sobre las armas. Su presupuesto militar es algo superior a dos millones de dólares. Su frontera con Bolivia es la más extensa y la menos vigilada de todas.

La Argentina se esfuerza por competir con el Brasil en términos militares. También fabrica aviones, tanques y otros vehículos de guerra. Su presupuesto militar es, proporcionalmente, tan elevado como el del Brasil.

El Perú tiene aviones Mirage, además de otros de fabricación soviética. También cuenta con alrededor de un centenar de tanques pesados y todas las demás armas que considera necesarias para enfrentar a Chile. Su presupuesto militar es diez veces superior al de Bolivia.

Chile equilibra, poco más o menos, el establecimiento militar del Perú. Posee aviones Mirage, tanques livianos, proyectiles tierra aire y una marina de guerra muy desarrollada. En suma, posee todo el material que juzga apropiado para enfrentar la potencia militar del Perú. Su presupuesto es también más de diez veces superior al de Bolivia y más o menos equilibrado con el respectivo presupuesto de guerra del Perú.

Queda el Paraguay, que si bien en términos de armas, número de soldados y presupuesto militar es algo inferior a Bolivia, cuenta, en cambio, con el dominio perfecto de un posible teatro de operaciones, lo cual fue ampliamente probado durante la guerra del Chaco.

Bolivia tiene unos veinticinco mil hombres sobre las armas. Unos cuantos aviones a chorro anticuados y otros especialmente destinados a la lucha antisubversiva. Existen algunos tanques livianos y otros vehículos de guerra. Además, unos pocos helicópteros y las armas livianas que son comunes a cualquier ejército de un país en desarrollo. Su presupuesto militar alcanza a unos setenta millones de dólares anuales. Teóricamente, con esos recursos debe defender las fronteras con sus cinco vecinos que se extienden por los cuatro puntos cardinales. En el hecho, según se ha visto antes, las fuerzas armadas de Bolivia se encuentran cubriendo las principales ciudades, los centros mineros y los distritos campesinos densamente poblados, todo eso al centro del país y tan lejos como es posible de las fronteras.

Así, pues, si la disuasión de un ataque armado contra Bolivia dependiera de su establecimiento militar, es evidente que tal ataque podría ocurrir en cualquier momento. Ello es tanto más cierto si se piensa en alianzas como aquella que se ha mencionado algunas veces entre Chile y el Paraguay para obligar a Bolivia a combatir en dos frentes. Ante tal perspectiva la capacidad disuasiva del establecimiento militar boliviano resulta virtualmente inexistente.

Guerra

En cuanto a ganar la guerra, ya se ha visto lo que ocurrió en los últimos cien años. Por lo demás, si las fuerzas armadas de Bolivia no sirven para disuadir la agresión, menos van a servir para ganar la guerra.

Como se ve, la afirmación de que la seguridad y defensa exterior del país depende de sus fuerzas armadas no es más que un mito contradicho por la realidad.

Las fuerzas armadas no son el pueblo en armas

Otro mito consiste en que las fuerzas armadas son el pueblo en armas. Eso tampoco es cierto.

Los reclutas

Como se ha visto más arriba, las fuerzas armadas de Bolivia están compuestas de un número de reclutas que varía entre veinte y veinticinco mil cada año, de acuerdo a las posibilidades del presupuesto nacional. Los conscriptos son jóvenes de 19 años de edad, que prestan su servicio militar por uno o dos años.

Durante ese tiempo reciben "instrucción de orden cerrado" que es cuando se les enseña disciplina, el manejo de las armas y las formaciones para los desfiles. Después viene la "instrucción de orden abierto", que les enseña los elementos del combate sobre diferentes terrenos.

Ambas enseñanzas se derivan de las experiencias de las guerras del siglo XX, excepto aquellas de las unidades que son especialmente preparadas por los americanos para la contrainsurgencia. Estas cuentan con armas y equipos especiales para ese fin y reciben instrucción también especial, incluyendo el paracaidismo.

Apenas si es necesario agregar que en una guerra internacional no todo lo que han aprendido para combatir la subversión interna resultaría útil.

Nada de lo anterior es importante aquí. Lo que sí es importante es que los reclutas siempre están de paso. Son transeúntes en el establecimiento militar. No viven del servicio que prestan ni hacen carrera en el mismo. Son civiles para los cuales su permanencia en el ejército no es más que un paréntesis temporal. En consecuencia, no son parte sino circunstancial de las fuerzas armadas.

Los que viven de la función militar

Además de los conscriptos existen los generales, jefes, oficiales, suboficiales y clases que a diferencia de los reclutas, viven de su función militar y hacen carrera dentro de ella. Su número total fluctúa entre seis y ocho mil personas. Menos de la mitad de ese número está constituido por profesionales civiles que prestan sus servicios a las fuerzas armadas, como médicos, dentistas, enfermeras, abogados, administradores, músicos, etc. Para ese propósito reciben un grado y se ponen el uniforme.

Oficiales de armas

Los restantes son los oficiales militares propiamente profesionales que se conocen como "oficiales de armas". Su número es más o menos de cuatro a cinco mil personas, contando de subtenientes a generales de división. Ellos son los que han recibido la educación descrita anteriormente, los que se caracterizan por un intenso espíritu de cuerpo y por su convicción de que han sido agraciados con la misión "sagrada" de gobernar Bolivia.

Si se tiene en cuenta que la población de Bolivia es poco más o menos de cinco y medio millones de habitantes, es fácil concluir que existe menos de un oficial de armas por cada mil personas. En consecuencia, es absurdo decir que las fuerzas armadas son el pueblo en armas.

La aceptación civil del sistema de dominación militar prolonga su duración

Los defectos de la educación militar y los mitos descritos anteriormente se encuentran, como es lógico, profundamente generalizados en las fuerzas armadas, lo cual no es de extrañar. Pero, además, ellos son también compartidos por los dirigentes políticos y sindicales civiles, por cuya influencia alcanzan amplios sectores de la opinión pública. Ese es un factor de capital importancia para la continuación de la dominación militar sobre Bolivia.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 56-57 Septiembre- Octubre/ Noviembre- Diciembre de 1981, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.